

# Iniciativa Providencia, Iniciativa Seaflower o Iniciativa Colombia

Germán Márquez<sup>1</sup>

**E**n días pasados presenté en la Universidad Nacional de Colombia y escribí para la publicación local virtual e impresa *El Isleño*, una propuesta que he llamado “Iniciativa Seaflower”, que ahora someto a consideración de ustedes; se trata de una manera diferente de pensar el futuro del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Caribe colombiano. El evento en el que presenté el documento era sobregiraba alrededor del extractivismo, una forma dañina de obtener recursos naturales y ganancias, que agota dichos recursos y los sustrae al aprovechamiento de sus dueños legítimos mediante procedimientos cuestionables, al mismo tiempo que deteriora el medio ambiente. Tal sería el caso de la minería y del petróleo en Colombia, que benefician a empresas multinacionales y a otros países, pero en detrimento de nuestro país, que agota sus recursos y sufre los impactos ambientales y sociales de su explotación.

En tanto que el extractivismo implica una sustracción rapaz de bienes ajenos, en detrimento de sus dueños, el Archipiélago de San Andrés y Providencia es un ejemplo doloroso de esta práctica, en más de un caso. Uno muy obvio es el de la pesca, un patrimonio de los raizales que fue expropiado por el estado colombiano que, como si los raizales no existieran ni hubieran usado nunca al mar, procedió (y procede aún) a repartir la pesca entre pescadores industriales nacionales y extranjeros. La pesquería se convierte así en una especie de minería de peces, caracoles y langostas, que impide que los recursos pesqueros se renueven y acaba con su sostenibilidad.

La especulación inmobiliaria y con las tierras ajenas es otra forma de extractivismo. El “desarrollo” de San Andrés se basó en un modelo extractivista; la declaratoria del Puerto Libre dejó las tierras de sus habitantes originales expuestas a la especulación y permitió la apropiación por recién llegados, en aras de establecer una soberanía mal entendida en el Archipiélago. La isla terminó sobrepoblada, llena de construcciones precarias, desvalorizada, cuando es una de las islas más hermosas del mundo, como sigue siéndolo a pesar de tan desafortunadas intervenciones. En vez de aprovecharla, se la desfiguró; en vez de apoyar a quienes la habían conservado para el país y para el mundo durante tantos años, se los marginó. Así, hoy los raizales poseen menos del 40% de su territorio y casi nada de los terrenos más valiosos y con potencial turístico del borde costero.

Sobre esto se construyó el modelo extractivista del turismo de San Andrés, una isla que genera mucho dinero, pero que poco se beneficia de él. ¿Qué le queda a la isla de los más de 700.000 pasajes aéreos que se vendieron para llegar a ella el último año? ¿Dónde está el dinero que cada turista paga por 4 o 5 días de estadía en ella? ¿Dónde el de las ventas en almacenes? La mayoría debe estar en Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro, Panamá, entre otros sitios de donde provienen las inversiones. Mientras esto ocurre, la isla debe asumir los costos ambientales y sociales del modelo: alto costo de vida, deterioro ambiental y muerte de los arrecifes, escasa pesca, mala calidad del agua y los servicios públicos, inseguridad creciente. Y una población enorme

<sup>1</sup> Biólogo, M.Sc. Biología Marina, Dr. En Ecología, Profesor Titular (J) U. Nacional de Colombia gemarquezc@gmail.com.

Recibido: 21 de agosto de 2014. Aprobado: 28 de septiembre de 2014.

de continentales colombianos, a muchos de los cuales las islas deben proveer empleo, habitación, servicios, salud, seguridad, a costa del bienestar de sus habitantes originales.

Este modelo, que se está extendiendo peligrosamente a Providencia, es insostenible. Providencia y Santa Catalina, en vez de aprender de la lección de San Andrés, está siguiendo peligrosamente el mismo camino, como lo puede comprobar quien recorra la isla y vea los numerosos avisos de venta de tierras en diversas partes. Quizá sea la mala situación económica lo que está llevando a esta venta masiva de tierras, aunque pareciera, por el número de carros, camionetas y motos y la prosperidad aparente de muchos, que no siempre es así. Tal vez la venta obedece a intereses más inmediatos, a una falta de visión de futuro que lo hipoteca en nombre de un presente fugaz. Pero, en cualquier caso, la perspectiva es muy negativa; pues tierra que se vende en estas islas es tierra que se pierde para siempre y con ella las alternativas de futuro, como lo evidencia la lección de San Andrés donde ya muchos han debido emigrar en busca de nuevas posibilidades de vida, una vez entregadas a intereses ajenos las opciones locales.

Por ello se requieren cambios urgentes. Sin embargo, la tendencia es a profundizar en el modelo sanandresano y resulta paradójico que las propuestas del Gobierno, dentro de lo que parece una política de Estado, sea más de lo mismo; sea la profundización del modelo extractivista; sea más “business as usual”, es decir más insostenibilidad. Por ello quiere atraer más inversionistas, como lo hizo el presidente a raíz del fallo de La Haya, que vengan a extraer más de las islas, en vez de hacer que los que ya están aquí las compensen adecuadamente por lo que obtienen de ellas. En vez de proteger su patrimonio cultural, lo irrespeta prohibiendo orar y entonar el himno nacional en inglés, como lo hizo el séquito de la primera dama a mediados de 2014 en Providencia. En vez de velar por un patrimonio excepcional, lo apuesta (y lo pierde) en riesgosas jugadas diplomáticas. En vez de

cuidar el prodigio del mar de los siete colores, lo expone a la explotación de hidrocarburos o al saqueo pesquero industrial e ilegal. En vez de formas armónicas de turismo, promueve la masificación, el “todo incluido” que poco incluye de la cultura, de la historia y del ambiente de las islas, y poco las respeta.

No solo no impide la enajenación de las tierras, hoy acelerada en Providencia, sino que propicia la especulación inmobiliaria y el desorden territorial, como lo hizo al imponer la construcción de un “spa” sobre un relicto natural e histórico que ha quedado dañado y expuesto a riesgos mayores. No se enorgullece de la riqueza étnica que las islas añaden al país pluriétnico y multicultural que señala la Constitución, sino que trata de negar la territorialidad raizal, en un acto tanto o más grave que el fallo de La Haya. En fin, el Gobierno, en vez de aliarse con los habitantes de las islas para buscar mejores caminos, genera rupturas, pretende comprar conciencias y propicia divisiones que le enajenan el cariño y la confianza de quienes habitamos en ellas. Y crea condiciones para un conflicto profundo, donde no se descartan violencias y guerras inimaginables hasta hace poco.

¿Qué puede hacerse? Para empezar se necesita una reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo deseable y posible; se encontrará que muchas cosas se han planteado hacia un mejor futuro. Por ejemplo, la necesidad de que la calidad prime sobre la cantidad. No más turistas, sino mejor turismo: ecoturismo, turismo educativo, científico, cultural, deportivo, comunitario. Turismo que entienda que, como decía el padre Martín Taylor hace ya años, no necesitamos hoteles de cinco estrellas porque las que son de cinco estrellas son las islas mismas. Turismo que sea consciente de que el mar que se ofrece a sus ojos puede ser el mar más hermoso del mundo. Turismo que se comporte consecuentemente con esa realidad, la aprecie, la disfrute y (sí, de nuevo) la respeta.

Tampoco se necesitan más inversionistas; se necesitan, si acaso, mejores inversionistas, con responsabilidad social y ambiental, dispuestos a

pagar impuestos y salarios justos y a reinvertir parte sustancial de sus ganancias en las islas y en la protección de su naturaleza y su cultura. Tampoco se necesita ni siquiera mucho más dinero, si se usan de manera más adecuada los recursos existentes. De hecho, se necesita menos de algunas cosas: menos turistas, menos cemento y menos población. Menos subsidios y más justicia. Y cambiar el viejo paradigma del desarrollo como crecimiento por el del desarrollo como organización. No crecer en desorden, como un tumor maligno, sino buscar un equilibrio saludable y proporciones armónicas acordes con la naturaleza frágil y hermosa de las islas.

La Reserva de biosfera Seaflower, que fuera declarada por UNESCO en 2001, es un instrumento para poner en práctica formas alternativas de abordar los problemas insulares. Su declaratoria es un reconocimiento internacional del elevado valor del patrimonio natural y humano de las islas, que son una muestra de convivencia armónica entre la sociedad y su entorno, pues los isleños, hasta la intervención del estado colombiano, habían alcanzado formas sostenibles de desarrollo y satisfactorios niveles de bienestar, con base en el aprovechamiento y la conservación de sus ecosistemas, en especial sus arrecifes de coral. Este modelo armónico fue arrasado por el modelo extractivista del Puerto Libre, pero sus bases culturales y naturales aún persisten; a partir de ello la Reserva de biosfera plantea que es posible recuperar formas de desarrollo cuidadosas con el entorno y la cultura, justas y equitativas para la sociedad, y económicamente satisfactorias.

A partir de las consideraciones anteriores, es forzoso concluir que se necesita trabajar en un cambio de modelo para el Archipiélago, el cual se puede fundamentar en la valoración de su patrimonio natural y humano, que puede ser a la vez el medio y el fin para alcanzar la sostenibilidad y el bienestar común. La protección del patrimonio insular es, a la vez, la meta adonde queremos llegar, y el medio para crear la mentalidad y las condiciones económicas para lograrlo. Los

cambios de mentalidad ya se han mencionado: cambiar crecimiento por organización, cantidad por calidad. Veamos algo sobre las condiciones económicas.

Las islas tienen un patrimonio natural y social por cuyo disfrute muchas personas están dispuestas a pagar, y de hecho pagan y han pagado a lo largo de muchos años cuando han decidido venir como turistas. Vienen por el mar de múltiples azules, por el clima, por las playas y, aunque no sean muy conscientes de ello, disfrutan del patrimonio cultural e histórico, un patrimonio aún más singular que el mar y que se expresa en la gente misma, en el trato humano, en el entorno social, en la arquitectura, en la gastronomía y en la lengua. Pero si usted le pregunta a un turista por qué está pagando, la respuesta más probable es que diga que está pagando por unos pasajes, por un hotel, por unas comidas; sólo si se les hace caer en cuenta entienden que vinieron y están pagando por el sol, el mar, las playas, la cultura y la historia. Quizá esta distorsión explique que poco o nada de los ingresos del turismo se destinen a la protección de estos recursos que son su fundamento y razón de ser, y que se asuma que toda la belleza está allí, imperturbable y para siempre, para que la explotemos sin consideración. Como si el entorno no estuviera afectado; como si la cultura no necesitara quien la defienda; como si nada estuviera pasando.

Pero sabemos que no es así y que, si no hacemos algo, las bases de toda la actividad turística y de la vida misma tienden a deteriorarse y con ella las posibilidades económicas y sociales del Archipiélago. Y ello requiere una respuesta de nuestra parte y requiere, además, de conciencia y propósitos claros, así como de recursos económicos que hagan innecesario el modelo extractivista que algunos parecen creer inevitable y permitan dar opciones a aquellos a quienes la necesidad obliga a vender las tierras, someterse a onerosas condiciones de trabajo o a sobreexplotar recursos escasos (pescado, caracol, cangrejo), pero aun así mal retribuidos por un sistema económico inadecuado, cuando no injusto.

La idea es, entonces, empezar por un acto de justicia y de lógica: hacer que una parte sustancial y significativa de las ganancias que genera el turismo se reinviertan en el cuidado y mejoramiento de lo que es su soporte mismo, esto es, la naturaleza y la cultura de las islas. El siguiente paso es resolver la pregunta de cómo y hasta qué punto sería posible conseguir recursos adicionales para la protección y conservación del patrimonio natural y cultural y al mismo tiempo generar bienestar para la población, porque, si no lo hacemos, un patrimonio reconocido por UNESCO como Reserva de biosfera Seaflower, podría perderse. Y una opción importante es que, así como hay ya tantas personas que pagan por disfrutar los patrimonios naturales y humanos del Archipiélago, parece posible que haya quien esté dispuesto a pagar algo más por protegerlos. Yo creo que hay mucha gente en el mundo que estaría dispuesta a ayudar para que conservemos la tercera barrera arrecifal más grande del Planeta, por preservar la cultura y la lengua raizal, por cuidar esta Reserva de Biosfera Seaflower, esta “Flor del Mar”, donde ellos mismos, sus hijos y sus nietos puedan conocer y entender algo de la belleza del mundo, tan amenazada.

Así, propongo convocar ayuda de la gente y de organizaciones y empresas interesadas en la naturaleza y en los derechos humanos y sociales, para que contribuyan voluntariamente a un fondo para la Reserva de Biosfera Seaflower. Puede ser desde un dólar aportado de más por un turista (más de U\$700.000 dólares si lográramos que cada turista lo haga), la contribución de una empresa o de un filántropo, el aporte de los mismos habitantes del Archipiélago. Y el aporte voluntario de los inversionistas ya establecidos en las islas, de las aerolíneas que sirven a las islas (COPA, Avianca, LAN) de las cadenas de hoteles On Vacation, Decameron, Eldorado, Arena Blanca, de Sol Caribe, etc.. Pero también de los distribuidores de gasolina, comerciantes y supermercados. Es decir de todos los que obtienen beneficios de las islas y deberían ser los primeros interesados en su conservación, que es la de su negocio.

Están por supuesto los recursos que el Estado tiene obligación de invertir en el desarrollo del Archipiélago, además de los que podrían exigírsele a través de mecanismos de justicia retributiva por los errores cometidos en el pasado, como la creación del Puerto Libre y el fallo de La Haya; en este sentido la creación de una estampilla para la conservación y el empleo en las islas es una posibilidad que alguien importante y que conoce de estos temas ha propuesto analizar. Otras fuentes de financiación posibles serían las compensaciones por intervenciones sobre ecosistemas en otras partes del país o del mundo, contempladas en la Ley, o negociaciones alrededor del carbono guardado o no emitido, si se logran conservar los bosques y arrecifes de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos. Al respecto cabe recordar que el Archipiélago posee más de 2500 km<sup>2</sup> de algunos de los escasos y muy complejos arrecifes coralinos del Planeta, y gran parte del poco bosque seco tropical que queda en Colombia, los cuales son enormes reservorios de carbono que corremos el riesgo de que regrese a la atmósfera y agrave los problemas climáticos planetarios, si continúan los procesos de deterioro como van, y sobre todo si se imponen ideas como la de explotar hidrocarburos en el Archipiélago.

La ejecución del conjunto de acciones necesarias debería ser eminentemente voluntaria y surgir, ante todo, de la convicción, por parte del Estado, de las instituciones y de las personas, de que es conveniente, posible y necesario conservar el patrimonio excepcional del Archipiélago; de que es también el mejor y más perdurable negocio, si de eso se trata, que podemos hacer en él.

A esta propuesta es a lo que he llamado “Iniciativa Seaflower”, iniciativa por la defensa de la Reserva de biosfera Seaflower, de su patrimonio natural y humano, de su belleza, pero sobre todo del futuro posible, que no tiene que ser el de unas islas agotadas por el modelo extractivista vigente. Iniciativa para adelantarnos al futuro y prepararnos para él, mediante la oferta de bienes y servicios naturales que, como la misma

belleza o la pesca de los arrecifes, serán cada vez más escasos, más demandados y más valiosos. Y para cuidar patrimonios culturales únicos, que contribuyen a la diversidad étnica y cultural de nuestro país. Y para, en un acto de justicia intergeneracional, esforzarnos por entregar a nuestros hijos un mundo mejor y no peor.

El nombre “Iniciativa” se pone por asimilación con la Iniciativa Yasuní, una acción emprendida por un grupo indígena ecuatoriano que trató de negociar con el mundo la conservación de su patrimonio, un área de selva húmeda tropical de elevada biodiversidad donde se encontró petróleo. La propuesta fue dejar el petróleo en su sitio si, a cambio, otros países, organizaciones y/o personas compensaban el 50% de lo que se dejaría de recibir, pero conservando la selva y evitando el impacto del petróleo sobre el clima. La Iniciativa Yasuní no alcanzó las metas propuestas, pero sí recaudó varios cientos de millones de dólares. Por ello, y a pesar de los problemas de la iniciativa inicial, muchas iniciativas similares están dándose en el mundo y ahora el término “yasunización” ha entrado al lenguaje del futuro.

Cabe pensar que una Iniciativa Seaflower pueda tener éxito si se la gestiona adecuadamente. Su monto no es tan elevado, aunque sus consecuencias serían más profundas, pues los arrecifes de coral son tan complejos y biodiversos como las selvas húmedas, pero mucho más escasos, y por ello su conservación es prioritaria. Por su parte, el patrimonio cultural del Archipiélago es aún más único y exclusivo; su desaparición significaría la extinción completa de una etnia y una cultura. El eje es la Reserva de biosfera de Biosfera, que pasaría a ser además una Reserva de la cultura, la ciencia y la historia. Y el término Reserva aplica muy bien aquí, pues es algo de hoy que se guarda para que no nos falte en el futuro.

La posibilidad de impulsar la Iniciativa Seaflower recaería, sobre todo, en nosotros mismos, con el apoyo del Estado. Una opción lógica es que se haga a través de CORALINA, entidad a cargo de la Reserva de biosfera, que ha adelantado acciones importantes en su implementación

y defensa, pero que puede dar un vigoroso paso más al frente, entrar a liderar el futuro ambiental de las islas y dar ejemplo al país. Así mismo es función de la gobernación del departamento archipiélago, cuyas miras respetables, centradas en la educación, encontrarían en esta iniciativa mecanismos adicionales para su gestión de “las islas del saber”. Un esfuerzo comunitario a través de estas dos entidades, con apoyo público y privado, debería devolverles el liderazgo en el manejo de los temas del Archipiélago, a los habitantes de estas islas y a sus autoridades. Todo ello con el apoyo del Gobierno central, donde muchos estamentos, como el Ministerio del Medio Ambiente, deben asumir su responsabilidad histórica y colaborar con la sociedad isleña en la construcción de un futuro posible, no extractivista, no depredador, no suicida. Donde el mar de los siete colores persista, donde podamos volver a comer cherna, tortuga, caracol y cangrejo. Esto es, hacer que esta Iniciativa Seaflower y las posibilidades de un desarrollo armónico y sostenible no se quede sólo en mis bien intencionadas palabras. Organizaciones internacionales podrían apoyar estas acciones y ayudar a recabar los fondos necesarios, así como a adelantar el debido control sobre el uso de los recursos.

Este es un planteamiento de futuro, que también podría ser para Colombia si propusiéramos una “Iniciativa Colombia” en la cual, en vez de destruir nuestro país para satisfacer las ansias de materias primas del monstruo insaciable del crecimiento, nos preparáramos para conservar el 60% del país y ofrecerle al mundo lo que más va a demandar en un futuro muy próximo: espacios verdes, biodiversidad, bienes y servicios de la naturaleza y de los ecosistemas, para lo cual contamos con una de las estructuras ecológicas más privilegiadas del Planeta. Colombia podría duplicar su área agrícola y ampliar significativamente la infraestructura requerida para desarrollarse (e incluso explotar gran parte de sus recursos mineros y energéticos) sin necesidad de deteriorar su base natural, como lo ha venido haciendo, resultado del pésimo manejo del territorio. Ello

nos ha sumido en los ciclos recurrentes de las catástrofes (inundaciones hoy, sequías mañana, hambre como nunca se había visto antes...). Lo que se requiere es ordenar el uso del enorme territorio que tenemos, aún mayor si le sumamos el mar a cuyas espaldas vivimos. Veremos entonces que tenemos una reserva invaluable sobre la cual construir un futuro mejor. Pero esto tendrá que ser tema para otra ocasión.

Por ahora baste decir que Colombia y las islas, en 2040, por poner una fecha no tan remota, podrán ser un desierto dejado por el extractivismo inmediatista que hoy mueve las locomotoras, o privilegiados modelos de sostenibilidad social, económica y natural, proveedoras de bienes y servicios ecosistémicos que para entonces serán cada vez más escasos y más necesarios. Depende de nosotros.

